

## **ESPACIO RURAL Y DESARROLLO REGIONAL: CAMPESINADO Y PROYECTO NACIONAL**

María de Gloria Marroni

Según relata Patterson (1988:15) un niño urbano definió el campo como "un lugar muy grande donde las vacas hacen sus necesidades". El mismo autor concluye "la noción es compartida por más gente de lo que en primer instancia podría uno pensar. Por desconocimiento, ignorancia o la combinación de ambas, desde la ciudad el campo es percibido a través de imágenes más o menos planas: reducto de la tradición, la parsimonia, la improductividad, la ignorancia y el fanatismo; pero también de la humildad, la hospitalidad, la solidaridad comunitaria. En todo el caso, el campo es la raíz de la mexicanidad, pero no su fronda, cuna del folklore, rumora de la modernidad".

Producto de la polémica generada durante el siglo XIX y que se prolonga en el siglo XX, México no está ajeno a las concepciones que sobre el campo prevalecieron en el pensamiento occidental y que están vinculadas a su vez a la noción de progreso. La propuesta colocó en el centro de sus preocupaciones la construcción de una sociedad homogénea y occidentalmente etnocéntrica, basada en un estilo de desarrollo resultantes del industrialismo y de sus procesos de urbanización, así como valores específicos del individualismo. El paradigma de este modelo estaba simbolizado en la figura del varón blanco, occidental, de clase media transformado en ciudadano.

Lo que se alejaba de este patrón tendía a ser relegado y considerado como una desviación a ser reencauzada o como un anacronismo que era necesario superar. Los habitantes de los pueblos pequeños, genéricamente denominados campesinos, vinculados en grande medida a las actividades agropecuarias y a la tierra, con un modus vivendis ligado a la naturaleza y a un espacio denominado rural, nunca claramente definido y que constituían la mayor parte de la

población mundial representaban la principal resistencia al proyecto de desarrollo concebido por la modernidad occidental. Por ello han sido objeto de innumerables estrategias de reconversión para cumplir con este papel. Con sus distintos matices, estas estrategias tendían a establecer en primer lugar una oposición entre el campo y la ciudad; en segundo lugar, consideran que la superación de esta oposición se realizaría de manera unidireccional, de la ciudad hacia el campo, de la industria a la agricultura, eliminando, sometiendo o controlando la sociedad rural.

Las voces que se opusieron a este esquema fueron perdiendo espacios progresivamente ante de la avalancha civilizadora de la modernización urbano-industrial; sin embargo, muchos lustros después, al final del siglo XX, el modelo de desarrollo planteado hizo crisis. A partir de la década de los setentas de este siglo se hizo patente que la mayor parte de las regiones del mundo no seguían los patrones de desarrollo de los Estados Unidos, Europa Occidental o Japón. Contrariamente, a lo propugnado por los partidarios de estos patrones, el desarrollo no irradiaba de estas naciones a las demás; la riqueza no goteaba de los sectores más enriquecidos a los más pauperizados, y aumentaba la brecha entre los que sustentaban el poder económico y los que no. Los procesos de modernización no eliminaron las formas de vida tradicionales pero sí las trastocaron; el gigantismo de la industria y los procesos de urbanización amenazaron con colapsar la misma existencia humana. Por último, la sobreexplotación de los recursos del planeta cuya base es el fomento de un consumismo sin límites, llevó a cobrar conciencia de que se vive en un mundo finito que era preciso regenerar y conservar. La lucha por el desarrollo sustentable - expresión máxima de fin de siglo sobre la necesidad de replantear el modelo civilizatorio- converge en una revalorización del campo y en una nueva dimensión del espacio rural.

Esto concierne a México por partida doble: por su mayor integración en el entorno mundial y por las condiciones de su aparato agropecuario y de nivel de vida de la población rural.

### **Sector agropecuario y sociedad rural: crisis y sobre vivencia**

En la literatura especializada en el país abundan enfoques sobre el campo a partir de dos elementos centrales: las crisis y los procesos de modernización. En los últimos treinta años, la

mayoría de los estudios hace referencia a la situación de crisis en que se encuentra el sector y al impacto de los diversos procesos de modernización en esta crisis. Muchas de las interpretaciones establecen una correlación entre los dos fenómenos, al plantear que las estrategias modernizadoras fueron inadecuadas o contraproducentes para impedir o enfrentar las crisis. Se afirma, inclusive, que estas estrategias la han profundizado por sus efectos segmentadores a nivel de los productores y por dejar fuera la mayor parte de la población rural.

Se comparte el diagnóstico acerca de la manifestación de la crisis, bajo la aseveración de que el campo ha dejado de cumplir sus funciones en el proyecto de desarrollo del país. Los indicadores saltan a la vista: caída del PIB agropecuario en el conjunto del PIB; desproporción entre el primero y la PEA agropecuaria (8% y 25% respectivamente), importación creciente de alimentos y déficit constante en la balanza agropecuaria; altos índices de desempleo y pauperización de la población rural; escasa utilización de tecnología moderna y productividad; deterioro ambiental, elevados índices de migración, desintegración familiar, parcelación de la propiedad, inadecuada utilización del suelo y ocupación de la frontera agrícola, deterioro de la infraestructura, además de los constantes problemas políticos y de inestabilidad social.

El consenso no es el mismo cuando se habla de los factores que originaron esta situación, las perspectivas existentes y las alternativas para enfrentarla. Hasta 1982 la discusión se centró más en las causas de la problemática, en el entendido de que había que corregirla y encauzar las soluciones a partir de una concepción de la relación Estado-campesinos derivada del movimiento revolucionario de 1910. A partir de esta fecha hay un cambio sustancial en el debate, cuando la propuesta oficial indica un abandono de estos principios. Para algunos analistas no se puede establecer un corte cronológico tan radical: muchos de estos principios fueron letra muerta, otros ya habían sido rebasados y estaba la evidencia de que el agrarismo oficial fue más retórica que realidad. La situación misma del sector y de los campesinos por estas fechas parecería dar razón a estos argumentos. Sin embargo, el nuevo proyecto para el campo, alentado por las políticas adoptadas por el gobierno a partir del sexenio de De La Madrid, se asentaba en fundamentos distintos de los anteriores y sin viso de confluencia con ellos.

Su carácter desregulacionista y aperturista, en la modalidad que México adoptó para insertarse en la nueva división internacional del trabajo, traía graves repercusiones para el sector a punto de colapsarse por una crisis estructural que duraba ya tres décadas. Aún así la propuesta, plasmada en el Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994 (PRONAMORCA), profundizó las estrategias modernizadoras neoliberales iniciadas anteriormente y pretendió darles un carácter definitivo.

Al considerar que el intervencionismo y el proteccionismo excesivos del Estado han sido los factores determinantes de los problemas del sector, a partir del PRONAMORCA se acelera la reestructuración del aparato agropecuario y de las instituciones relacionadas con el campo, en tres líneas centrales:

- adelgazamiento del papel del Estado, expresado, por un lado en la disminución del gasto público hacia el campo; por otro, en una amplia política de desincorporación. Esta afectó la columna vertebral del sector en todos sus rubros importantes (financiamiento, seguro, subsidios, asistencia técnica, investigación y capacitación, comercialización, entre otros). La SARH, dependencia rectora de sector y transformada en SAGAR, sufre un acotamiento sustancial de sus funciones. Otros organismos como CONASUPO, BANRURAL -bajo la modalidad de reestructuración- también ven restringido su marco de actuación; una proporción significativa de dependencias y paraestatales desaparece (INMECAFE; FERTIMEX; ASEMEX).
- las reformas a los marcos legales sobre la tenencia de la tierra, uso del suelo y explotación de los recursos naturales. En este contexto, las reformas al artículo 27 fueron la medida más cuestionada, por el papel que ha jugado el ejido en la constitución del campesinado mexicano y la sociedad nacional. El cambio de la legislación no eliminó esta figura, pero en la práctica abrió las posibilidades de una privatización gradual de la tierra, a pesar de las mediaciones políticas que lograron incorporar modificaciones al texto original. Los conflictos con la reforma del ejido fueron tan altos, que opacaron los otros cambios legislativos de igual o mayor importancia como la modificaciones a la ley Federal de Aguas y las leyes que rigen el aprovechamiento de los recursos forestales. Estos últimos, en su mayoría, son considerados

patrimonio nacional, se encuentran en reas indígenas, reservas ecológicas o propiedades comunales. Las modificaciones legales implementadas -que abren la posibilidad de su explotación por grandes compañías, incluyendo las transnacionales- tendrán serios impactos ambientales y en las condiciones de vida de las regiones en donde se localizan estos recursos;

- la apertura comercial. Al igual que los demás sectores nacionales, el agropecuario también fue sometido a un proceso de apertura comercial, bajo el argumento de las ventajas comparativas y de que es imposible sustraerse a las tendencias globalizadoras del mundo actual. Este proceso afectó al sector en dos direcciones complementarias: la apertura a la importación de productos procedentes de otras naciones (prioritariamente, Estados Unidos y Canadá, debido al TLC), y la eliminación o disminución del proteccionismo hacia la producción nacional, considerado como incompatible con el libre mercado. Desde las discusiones preliminares, hubo fuerte oposición a la forma como estaba concebida la apertura. Las principales críticas se centraron en:

- la imposibilidad del sector agropecuario de competir con los socios comerciales (del TLC, en principio), debido a las desigualdades estructurales de los sectores de estos países y de México;
- el alto nivel de intervención del mercado mundial de productos agropecuarios y el proteccionismo que los países desarrollados ofrecían a sus productores;

- la probabilidad de eliminación de importantes rubros de la actividad agropecuaria en México y de los productores vinculados a estos rubros, en especial los de granos básicos;

- los riesgos de crear una dependencia alimentaria y de enfrentar en el futuro una escasez en el mercado de cereales y una alza en los precios de los alimentos como ocurrió a principios de 1996.

Las principales demandas de los productores nacionales fueron:

- plazos suficientes para que se pudiera reconvertir la actividad de las ramas susceptibles de competitividad;

- apoyos semejantes a los que otorgaban a sus productores los países con los que se negociaba la apertura; en especial, se solicitaba tasas competitivas de financiamiento y subsidios;

- dejar el maíz fuera de los acuerdos comerciales y sobre todo del TLC, por su carácter estratégico;

- establecimiento de límites o restricciones (candados) para la importación de algunos otros productos que pudieran afectar a los productores nacionales;
- facilidades para importar a precios preferenciales los insumos necesarios para la producción nacional y que encarecían los costos.

Aunque estas demandas provenían también de los empresarios y de que tenían el consenso de la mayoría de los productores y otros sectores (como las comunidades académicas) y de que hubieron medidas de presión por parte de estos grupos, poco incidieron en la rectificación de las negociaciones oficiales. Sólo se incorporaron modificaciones marginales en la política de apertura comercial. Se obtuvieron algunas promesas de subsidio que se concretarían en el insuficiente y discutido PROCAMPO y concesiones para la importación de algunos insumos; al maíz le dieron la gracia de 15 años, para que su explotación pudiera "reconvertirse o morirse"(Marroni:1996).

Con excepción de la euforia efímera de los grupos de exportadores, portadores de altas ventajas comparativas, la devaluación del peso de 1994 amplió la convergencia de productores de los más diversos estratos así como de instancias interesadas en el problema; se había generado la urgencia de afinar e integrar las distintas propuestas para construir un proyecto alternativo para el campo y que fuera también parte de un nuevo proyecto nacional.

### **El desarrollo regional y el espacio rural: un proyecto alternativo para los campesinos de México**

Una opción distinta para el campo se inserta en un proyecto nacional a partir de dos ejes centrales: el redimensionamiento del espacio rural en el conjunto social y el replantamiento de las estrategias específicas para el sector agropecuario, sus productores y trabajadores.

El primer caso implica abandonar la vieja oposición entre el campo y la ciudad, que visualiza la sociedad rural como un resabio del pasado, un obstáculo a los cambios, pero fuente inagotable de recursos para el sostenimiento del desarrollo urbano industrial. Significa refutar también la concepción de lo rural solamente como ámbito del sector agropecuario o del agrario, anulando

sus demás potencialidades. Finalmente, redimensionar el campo requiere de acciones que frenen su deterioro, la pérdida de importancia en el conjunto de la economía nacional, para iniciar una etapa en la que se logre un mejor equilibrio intersectorial. Con ello se avanzaría en un proyecto nacional que garantice, por lo menos, uno de los derechos fundamentales más negados a la población mexicana: el derecho a la alimentación.

Las tareas a cumplir desde el punto de vista interno del sector están en estrecha relación con los planteamientos anteriores, aunque exijan abordajes particulares y de gran envergadura.

Una de las tareas más prioritarias y difíciles es la de enfrentar la considerable diferenciación social predominante entre los diversos grupos de productores. Las políticas desregulacionistas y aperturistas no sólo encontraron, constataron y tendieron a acentuar la brecha entre los varios estratos sociales en el campo, sino que las justificaron. Para ellas el mercado es el único indicador de eficiencia: de acuerdo con esta lógica, las tipologías recientes clasifican los productores agropecuarios por su grado de competitividad en un mercado abierto, o sea: los que son competitivos, los que podrían llegar a serlo (bajo ciertas condiciones) y los que no lo son. Y a pesar de que éstos constituyen la parte mayoritaria de los productores, la perspectiva para ellos, desde este punto de vista, no reside en permanecer en la actividad rural o en el campo. Bajo el argumento de que existe demasiada población vinculada al campo, se estableció, entonces, como meta la reducción de la PEA agropecuaria de 25% a 10%, en plazos relativamente cortos.

De nueva cuenta la modernización del sector prescinde de los campesinos y trata de reproducir los modelos de desarrollo adoptados por otros países en circunstancias temporales y espaciales absolutamente distintas.

"Modernizar se entiende como mecanizar, impulsando un modelo intensivo en el uso de recursos y capital que desplaza mano de obra. Esta idea de modernización pasa por una crisis en los países desarrollados que fueron sus impulsores, debido a los altos costos ambientales, sociales y culturales que genera".

Por ello, la otra tarea a que se han abocado las organizaciones campesinas es demostrar que también defienden un proyecto modernizador y que no pretenden regresar a un utópico pasado como se les acusa frecuentemente. Reivindican una modernización incluyente y que no rechaza la tradición. De acuerdo con sus supuestos (CECCAN, 1994:28), modernizar:

- no implica urbanizar a los campesinos, sino generar un proceso de reformas que permita recrear a la sociedad rural incorporando las ventajas implícitas en la sociedad urbana al tiempo que recupera su especificidad. La modernización debe impulsar el desarrollo de una agricultura con campesinos y agricultores;
- de la misma manera, no implica exclusivamente el impulso del desarrollo de un modelo agropecuario basado en el uso intensivo de maquinaria, agroquímicos y en la compactación de la tierra, sino, la implementación de un proceso en el que, sin menospreciar las aportaciones de un proyecto de este tipo, incorpore también, modelos de desarrollo sustentable que recuperen tecnologías tradicionales;
- implica que los productores actúan en el marco de una diversidad cultural y regional de una complejidad irreductible;
- la producción y el desarrollo económico y social de los productores está ligado directamente al incremento en la productividad y a la eficiencia productiva, a la integración vertical y horizontal de productores, recursos y actividades, al diseño de políticas públicas que lo favorezcan y la construcción de instituciones que los hagan posibles.

Se reitera, entonces, que los mecanismos segmentadores que acentúan las desigualdades sociales deben ser contrarrestados y las estrategias que excluyen a la mayor parte de los productores, eliminadas. Por lo tanto, las políticas discriminatorias hacia los sectores campesinos deben ser sustituidas por otras, que garanticen un mejor equilibrio sectorial, aun cuando las demandas justas de los agricultores empresariales también merecen ser atendidas.

El debate sobre el nuevo modelo para el campo requiere también adoptar una posición entorno a las estrategias para el sector dentro de la economía de mercado, al papel de la economía



campesina en los cambios de fines de siglo y los procesos de globalización. El consenso en relación a estos aspectos se sintetiza en las siguientes proposiciones:

- la falsa disyuntiva mercado o intervención estatal es insostenible. Se requiere una intervención diferente por parte del Estado, que no signifique un neocorporativismo, pero que sea lo suficientemente fuerte como para cohibir las desigualdades producidas por el "mercado a secas" y capaz de redistribuir la riqueza social;

- más que la prolongación agónica de la agricultura de subsistencia y su confinamiento a áreas marginales, es posible promoverla, en varios casos, a nivel de una producción familiar integrada. Es decir una economía campesina funcionalmente adecuada al mercado, que produce excedentes, con capacidad de acumulación, y no en proceso de descomposición permanente;

- relacionado a lo anterior, los análisis recientes refutan la concepción de productividad asociada a las economías de escala, al gran capital, a las gigantescas corporaciones y a la explotación de vastas extensiones de tierra. Estas mismas críticas sustentan la viabilidad económica de la actividad a pequeña escala y la explotación agropecuaria es proclive a ello;

- los efectos de la globalización pueden ser enfrentados de varias maneras y existen fórmulas más favorables para que el país se inserte en la actual división internacional del trabajo. Mantener y rescatar los espacios nacionales, regionales y locales debe ser una prioridad en la presente coyuntura. La homogeneización globalizadora no debe suplantar a la heterogeneidad que representa una de las principales riquezas de la sociedad rural y su misma identidad; ser uno y diferente es condición para la misma existencia de los grupos campesinos.

En este sentido, son los espacios locales y regionales la instancia en donde el proyecto alternativo para el campo adquiere plena vigencia.

"Es fundamental promover una nueva concepción de desarrollo regional como base para garantizar un desarrollo rural integral en el que estén incluidos todos los actores sociales del campo y no se margine a nadie por su condición económica, por sus posiciones políticas, ni por su carácter de etnia (CAP, 1995:303).

El desarrollo rural viene aparejado del desarrollo regional en varios sentidos, o sea:

- la región es por excelencia el espacio de la actividad agropecuaria y la organización de esta actividad debería considerar este determinante. Los programas de desarrollo centralizados omiten las particularidades locales y tienden a ahondar las desigualdades;
- la menor intervención del estado y las políticas globalizadoras provocan mayores desequilibrios regionales, por lo que hacer efectiva la planeación regional es una condición para enfrentar los efectos distorsionantes de las macropolíticas de corte neoliberal en los contextos particulares;
- la región es el espacio de poder y negociación de las organizaciones de productores y en donde se pueden canalizar sus demandas e integrar sus propuestas para la solución de los problemas diagnosticados. "El mayor peso político del movimiento campesino está en las regiones; fortalecer la incidencia de las organizaciones en la política puede tener buenos resultados" (Ceccan, 1994:123).

Finalmente el mismo documento del CECCAN, resultado de un esfuerzo de integración de amplios sectores que trabajan por una propuesta alternativa para el campo, es el que vincula el proyecto para el campo con el proyecto nacional:

"El desarrollo de las regiones no sólo implica administrar los recursos, mejorar la producción agropecuaria, construir la infraestructura necesaria, avanzar en la industrialización, aumentar las actividades comerciales, incrementar los niveles de bienestar de la población, mejorar las comunicaciones y transportes, sino distribuir el poder político para democratizar la estructura social". Sería difícil concebir que todo ello pudiera concretizarse exclusivamente en las reas rurales: por el contrario, en estas acciones convergen también los intereses de la mayoría de los habitantes del país.

La construcción de una metodología para distinguir lo urbano de lo rural ha sido una constante en las ciencias sociales, que no ha resuelto precisamente la dificultad de distinguir ambas dimensiones. Los indicadores cuantitativos, fijados con base en el número de habitantes de las comunidades o en el porcentaje de la PEA vinculado al sector primario tuvieron una utilidad

operativa, pero resultan poco funcionales en la actualidad, aún cuando siguen siendo utilizados. Así la cifra de 2 500 habitantes, establecida inicialmente para distinguir a la población rural de la urbana no refleja más los propósitos para los que fue establecida. Si bien dicha cifra fue ampliada, esto no ha resuelto el problema.

Una parte considerable del quehacer de las ciencias sociales contemporáneas ha estado orientada a debatir y proponer soluciones al problema campesino, con base en el diagnóstico de la disfuncionalidad de este sector para la modernidad.

A favor del TLC se argumentó que México podría beneficiarse, debido a las ventajas comparativas que disfrutaba en ciertas ramas (hortalizas, productos tropicales, exportación de becerros, miel) y que en otras, el acuerdo obligaría a los productores a reconvertir sus explotaciones para ser competitivos. Sin embargo, los análisis indicaban que cualquier de las dos posibilidades no estaban al alcance de la mayoría de los productores nacionales, sobre todo, los dedicados a los granos básicos, pilar de toda la agricultura en el país.

En principio la devaluación favoreció la exportación de los productos agropecuarios mexicanos, pero simultáneamente se dispararon los costos de producción, debido a que los insumos eran, en gran medida, importados. Sin embargo, el mayor problema que enfrentaron los productores fue el crédito; si muchos de ellos antes de la devaluación ya tenían carteras vencidas, el aumento de las tasas de interés después de la devaluación, llevó a varios al colapso.

## **BIBLIOGRAFÍA**

CECCAM-UNORCA. El futuro del campo. Hacia una vía de desarrollo campesino. Friedrich Ebert Stiftung. 1994.

Consejo Agrario Permanente. Foro de ratificación de propuestas de las organizaciones campesinas para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 1995.

Marroni, María da Gloria. "Los granos Básicos en México: una historia de modernizaciones recurrentes y crisis permanentes". La crisis productiva y financiera mexicana. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias Sociales y Humanidades. (En prensa).

Patterson, Jorge Zepeda. "Los estudios sobre el campo en México". Las sociedades rurales hoy.

Patterson, Jorge Zepeda (editor) Zamora. El Colegio de Michoacán. Conacyt. 1988.

Programa Nacional De Modernización del Campo. 1990-1994.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Maestría en Análisis Regional, CISSDER. UAT. Programa Supera Anuies.